SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 12/2015

Recomendación N°	12/2015
Autoridades Responsables	Elemento de Seguridad y Custodia del Centro de Internamiento Juvenil
Expediente	3VQ-0026/14
Fecha de emisión/	7 de mayo de 2015
HECHOS	
<p>V1 presentó queja ante este Organismo Estatal solicitando la investigación de posibles violaciones a sus derechos humanos, en relación con la revisión corporal que de manera abusiva le practicaron elementos de Seguridad y Custodia del Centro de Internamiento Juvenil de San Luis Potosí.</p> <p>La víctima manifestó que el 8 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, se constituyó en el Centro de Internamiento Juvenil para llevar a cabo actividades en la unidad terapéutica, debido a que prestaba sus servicios voluntarios, pero al momento de realizar el registro para su ingreso, un elemento de Seguridad y Custodia le indicó que depositara en los casilleros la sudadera con gorro que vestía ya que era una prenda con la cual no podía ingresar, motivo por el cual atendió esa instrucción.</p> <p>Posteriormente, al ingresar al área de cubículos AR1, elemento de Seguridad y Custodia llevó a cabo la revisión corporal y le ordenó bajarse los pantalones y quitarse la ropa interior, además de indicarle que hiciera sentadillas, lo cual llevó a cabo ante esa indicación. Más tarde al finalizar las actividades en la unidad terapéutica, comentó lo sucedido a la Coordinadora de la Comunidad Terapéutica quien le respondió que las revisiones “<i>exhaustivas</i>” eran parte del proceso de revisión.</p>	
Derechos Vulnerados	✓ Al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica
OBSERVACIONES	
<p>De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 8 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, AR1 agente de Seguridad y Custodia del Centro de Internamiento Juvenil realizó una revisión corporal a V1, previo a su ingreso a ese Centro para realizar sus servicios voluntarios en la Comunidad Terapéutica ya que desarrollaba un taller dirigido a los jóvenes privados de su libertad, para lo cual le solicitó que se bajara los pantalones junto con su ropa interior y realizara sentadillas lo que la víctima consideró un trato indigno.</p> <p>En el informe que rindió AR1, personal de Seguridad y Custodia señaló que en la revisión corporal practicada a V1, respetó los lineamientos y reglamentos que se siguen en el Centro de Internamiento Juvenil. Por su parte, en el informe rendido por la Coordinadora de la Unidad Terapéutica señaló que las revisiones corporales se efectúan de manera “<i>exhaustiva</i>” como parte de los procedimientos de la Institución, lo que está establecido en el Protocolo General de Revisión de visita a jóvenes privados de su libertad, que señala que una revisión “<i>exhaustiva</i>”, comprende en deslizar hasta las rodillas los pantalones incluyendo la ropa interior, y realizar</p>	

sentadillas con el fin de buscar objetos prohibidos.

De esta manera, el hecho de que AR1, personal de seguridad y custodia, ordenara a la víctima que se despojara de su ropas y obligarlo a realizar sentadillas sin ninguna prenda que cubriera sus partes íntimas, constituye un acto que atenta contra la dignidad de las personas, debido a que es obligación del personal de custodia dirigirse en todo momento a los visitantes con amabilidad, respetando la intimidad de los mismos, evitando humillarlos o degradarlos al solicitar hacer sentadillas, aunado a que no deben quitarse las prendas de vestir, por lo que incumplió con lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, que señala que los elementos están obligados a respetar y proteger la dignidad humana, observando en todo momento el respeto de los derechos humanos.

Es importante destacar que el derecho al trato digno es aquella prerrogativa que posee todo ser humano para que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales y de trato, acordes con las expectativas en un mínimo de bienestar. En el presente caso se vulneró su derecho al trato digno que se establece en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 11.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, el Estado está obligado no sólo a respetarlo, sino a establecer las condiciones para su pleno goce y ejercicio.

El personal de seguridad y custodia del Centro de Internamiento Juvenil no debe llevar a cabo revisiones que atenten contra la dignidad de las personas, bajo el argumento de que estas deban ser “*exhaustivas*” o que pueden efectuarlas de la manera en que consideren necesario, como en el presente caso sucedió que AR1, elemento de seguridad y custodia, solicitó a V1 que se despojara de su ropa íntima y realizara sentadillas, ya que la evidencia permite advertir que en el procedimiento no se utilizó otro método de revisión corporal ya que desde el momento del ingreso de V1 se le indicó que se despojara de su vestimenta, es decir, no se dispuso de otros medios de revisión y tecnología para evitar vulnerar su dignidad.

En este sentido, los actos de revisión tienen que llevarse a cabo procurando causar el mínimo de molestias a las personas, y no deben de servir de pretexto para abusos y atropellos como sucedió en el caso de V1; lo que sí debe evitarse son los excesos con que las autoridades realizan las revisiones, en particular despojarlos de las prendas de vestir y obligar a que realice sentadillas supuestamente en aras de la seguridad interior del Centro, lo que no se justifica de ninguna manera.

Es de destacarse que si bien es cierto que las revisiones a quienes ingresan a los Centros de Reclusión tienen por objeto evitar la introducción de objetos o sustancias prohibidas que pongan en riesgo la seguridad no solo de los jóvenes internos, sino de las propias autoridades que laboran en estos lugares como de las visitas, tales revisiones deben de llevarse con el más absoluto respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos humanos.

Por lo anterior, es indispensable que dichas revisiones sean suprimidas y en su lugar se utilicen los aparatos y tecnología disponibles para la detección de objetos y sustancias prohibidas; también se debe capacitar a los servidores públicos que realicen dichas tareas, con el objetivo de construir una cultura del servicio público que tenga como principio rector el respeto a la dignidad humana, por lo que es necesario que se expidan manuales de procedimientos, en los que se señale con precisión la forma en que deben efectuarse las revisiones corporales y que estos se encuentren sustentados en una norma en los cuales deberán tomar en cuenta, como objetivo primordial, la seguridad y el absoluto respeto a los derechos humanos.

Resulta importante destacar que el Centro de Internamiento Juvenil no cuenta con un ordenamiento interno que regule la administración del lugar, las funciones del personal, las faltas, sanciones y procedimientos de que pudieran ser objeto tanto jóvenes privados de su libertad como su personal, así como del procedimiento de ingreso y revisión de las visitas, familiares o terceras personas.

En este orden de ideas, la omisión de la autoridad deriva de la falta de un Reglamento Interior del Centro de Internamiento Juvenil del Estado de San Luis Potosí, el cual es indispensable para que los actos de autoridad estén debidamente regulados y de esta manera fundamente y motive sus decisiones. En este sentido, el artículo 125 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, señala que corresponde a la Dirección de Ejecución de Medidas para Menores la emisión de los reglamentos que rijan el cumplimiento de las medidas previstas por ese ordenamiento, lo cual se encuentra pendiente.

RECOMENDACIONES

A Usted Directora General de Ejecución de Medidas para Menores

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V1, que incluya la atención psicológica con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió personal de Seguridad y Custodia del Centro de Internamiento Juvenil, y envíe a esta Comisión las constancias de cumplimiento.

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda para que cesen las revisiones indignas y denigrantes en el Centro de Internamiento Juvenil, garantizándose un absoluto respeto a la dignidad de las personas, evitando cualquier acto de molestia que vulnere sus derechos humanos.

TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se lleven a cabo las gestiones necesarias para que el Centro de Internamiento Juvenil adquiera la tecnología de punta o los instrumentos necesarios para llevar a cabo las revisiones de personas y pertenencias con el fin de detectar objetos que estén prohibidos para ingreso al Centro de Internamiento.

CUARTA. Gire las instrucciones a quien corresponda a efecto de que realice una revisión al Protocolo General de Revisión de visita a jóvenes privados de su libertad en el Centro de Internamiento Juvenil de San Luis Potosí,

con el fin de que los procedimientos de revisión se apeguen a los estándares en materia de derechos humanos, y remita a esta Comisión las constancias de su cumplimiento.

QUINTA. Gire instrucciones a quien corresponda para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Justicia para Menores en San Luis Potosí, elabore un proyecto de Reglamento para el Centro de Internamiento Juvenil, el cual deberá presentar a las autoridades pertinentes para su aprobación y publicación, y remita a esta Comisión las constancias de su cumplimiento.

SEXTA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y se proporcione la información que se solicite y tenga a su alcance.

SEPTIMA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente a personal del Centro de Internamiento Juvenil y de Seguridad y Custodia, el tema de derechos humanos, en particular los derechos al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica, enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento.